

CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE
TÉCNICOS/AS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

EJERCICIO

17 de marzo de 2026

1. De acuerdo con lo señalado en el Preámbulo de la Constitución española de 1978, la nación española deseaba:
 - a. Promover la justicia y la libertad.
 - b. Fomentar la libertad, la justicia y la igualdad.
 - c. Establecer la justicia, la libertad y la seguridad.
2. El mismo Preámbulo de la Constitución añade que la nación española proclamó su voluntad de garantizar la convivencia:
 - a. Democrática dentro del único marco de la propia Constitución.
 - b. Democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.
 - c. General en el marco de la Constitución y de las leyes conforme a un orden social y representativo justo.
3. No forma parte de los fundamentos del orden político y de la paz social, recogidos en el artículo 10 de la Constitución:
 - a. La seguridad jurídica.
 - b. El libre desarrollo de la personalidad.
 - c. La dignidad de la persona.
4. ¿En qué caso puede un español de origen ser privado de su nacionalidad?
 - a. Únicamente a través de una resolución judicial.
 - b. En casos de delitos de terrorismo.
 - c. En ningún caso.
5. Los actos del Rey son refrendados:
 - a. Por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes.
 - b. Por el Ministro de Administraciones Públicas.
 - c. Ninguna de las anteriores es correcta.
6. Las Cámaras podrán delegar la aprobación de proyectos y proposiciones de ley en:
 - a. Cualquier Comisión.
 - b. Las Comisiones Legislativas permanentes.
 - c. Las Comisiones Legislativas Permanentes y No Permanentes.

7. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno:
 - a. La potestad de dictar normas con rango de ley sobre cualquier materia.
 - b. La potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo 81 de la Constitución.
 - c. No puede delegarle la potestad de dictar leyes, al ser de su competencia exclusiva.

8. Según la Constitución, las sentencias del Tribunal Constitucional tienen el valor de cosa juzgada a partir:
 - a. Del mismo día de la fecha de la sentencia.
 - b. Del mismo día de su publicación en el BOE.
 - c. Del día siguiente de su publicación en el BOE.

9. ¿De acuerdo con qué principios debe actuar la Administración Pública conforme al artículo 103 de la Constitución?:
 - a. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
 - b. Eficiencia, autonomía, descentralización, desconcentración y coordinación.
 - c. Eficiencia, jerarquía, descentralización, concentración y coordinación.

10. El artículo 103 de la Constitución dispone que se regulará por ley:
 - a. El sistema de compatibilidades de los funcionarios públicos.
 - b. El acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y compensación de desventajas.
 - c. El estatuto de los funcionarios públicos.

11. El artículo 138 de la Constitución dispone que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar:
 - a. Privilegios económicos o sociales, salvo que se recojan en una ley.
 - b. Privilegios fiscales o sociales, en ningún caso.
 - c. Privilegios económicos o sociales, en ningún caso.

12. ¿Quién puede adoptar medidas que obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio nacional?
 - a. Las Cortes Generales.
 - b. El Gobierno, mediante la correspondiente delegación legislativa.
 - c. Nadie.

13. Según la Constitución corresponde al Estado:
- a. Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.
 - b. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
 - c. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
14. Según el Art. 83 de la Constitución Española, las leyes de bases no podrán en ningún caso:
- a. Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
 - b. Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
 - c. Las dos respuestas anteriores son correctas.
15. De acuerdo con la Constitución española, los tratados internacionales válidamente celebrados por España:
- a. Forman parte del ordenamiento interno una vez publicados oficialmente en España.
 - b. Solo producen efectos en el ordenamiento interno tras su desarrollo mediante ley ordinaria.
 - c. Solo producen efectos en el ordenamiento interno tras su desarrollo mediante ley orgánica cuando afecte a materia reservada a este tipo de leyes.
16. De acuerdo con el Art. 103 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ¿qué tipo de actividad define principalmente a las entidades públicas empresariales?
- a. Prestación de servicios públicos sin contraprestación económica.
 - b. Gestión de servicios o producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación.
 - c. Ejercicio exclusivo de potestades administrativas de policía o inspección.
17. Según el Art. 30 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ¿qué puede formular el interesado en caso de vía de hecho antes de interponer recurso contencioso-administrativo?
- a. Reclamación previa obligatoria como en la inactividad de la Administración.
 - b. Requerimiento a la Administración para que cese la actuación.
 - c. Recurso de alzada en vía administrativa.
18. Según el Art. 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ¿cuál es el plazo que la Administración tiene para cumplir voluntariamente una sentencia firme una vez notificada?
- a. Veinte días hábiles desde la notificación de la sentencia.
 - b. El plazo que fije expresamente el órgano judicial en la sentencia, o en su defecto dos meses a partir de la comunicación de ésta.
 - c. Un mes desde la firmeza de la sentencia, sin posibilidad de ampliación.

19. De acuerdo con el Art. 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el recurso contencioso-administrativo es admisible contra actos de trámite cuando:
- a. Actos de trámite en procedimientos de vulneración de derechos fundamentales.
 - b. Deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o causen indefensión.
 - c. Son correctas las dos respuestas anteriores.
20. Según el Art. 39.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la eficacia de un acto administrativo quedará demorada cuando:
- a. Se dicte en sustitución de otro acto anulado.
 - b. Así lo exija su contenido o esté supeditada a notificación, publicación o aprobación superior.
 - c. Produzca efectos favorables al interesado sin lesionar derechos de o intereses legítimos de terceros.
21. Según el Art. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes actos administrativos NO requiere motivación expresa?
- a. Actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
 - b. Actos de aplicación de la tramitación de urgencia y de ampliación de plazos.
 - c. Actos que se separen de los criterios establecidos en los informes obrantes en el expediente o del dictamen de órganos consultivos.
22. ¿Cuál es el plazo máximo para resolver un procedimiento administrativo iniciado de oficio, salvo que la norma específica diga otra cosa?
- a. Un mes desde la fecha del acuerdo de iniciación.
 - b. Tres meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.
 - c. Un mes desde la fecha de la denuncia de la mora en contestar por el interesado.
23. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acto administrativo es nulo de pleno derecho cuando:
- a. Se dicta por órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio.
 - b. Falta la motivación, aunque no sea preceptiva.
 - c. Sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten como consecuencia de ésta.

24. La caducidad del procedimiento administrativo produce:
- a. Archivo definitivo del procedimiento y no se puede volver a iniciar.
 - b. Archivo del procedimiento, pero se permite reiniciarlo siempre que no haya prescrito la acción del particular o de la Administración.
 - c. La prescripción de las acciones del particular y de la Administración.
25. Qué principios de intervención debe tener en cuenta la Administración Pública en el ejercicio de sus competencias al establecer medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos según el Art. 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?
- a. Deberán justificar la adopción de las medidas adoptadas y su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.
 - b. Deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva y motivar su necesidad para la protección del interés público.
 - c. Las dos respuestas anteriores son correctas.
26. De acuerdo con el art. 80 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ¿contra qué autos de los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo cabe recurso de apelación?
- a. Contra autos dictados en ejecución de sentencia y los que pongan término a la pieza separada de medidas cautelares.
 - b. Contra todos los autos de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
 - c. Contra autos que resuelvan el recurso de casación.
27. Según el art. 103 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ¿quién tiene la potestad de hacer ejecutar las sentencias contencioso-administrativas?
- a. A la Administración demandada exclusivamente.
 - b. A los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
 - c. A los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que hayan conocido del asunto en primera o única instancia.
28. ¿Qué trámite de participación es obligatorio antes de elaborar una norma reglamentaria según el Art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?
- a. Audiencia a interesados directamente afectados.
 - b. Consulta pública previa en el portal web de la Administración competente.
 - c. Información pública por plazo de quince días tras aprobación inicial.

29. ¿Contra las disposiciones de carácter general cabe recurso en vía administrativa?
- Sí, recurso de alzada preceptivo previo a recurso contencioso-administrativo.
 - Sí, recurso potestativo de reposición previo a recurso contencioso-administrativo.
 - No, sólo cabe recurso contencioso-administrativo.
30. De acuerdo con el art. 96.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la tramitación simplificada del procedimiento sancionador:
- El interesado puede oponerse y exigir la tramitación ordinaria en cualquier momento.
 - No se admite oposición expresa del interesado a la tramitación simplificada.
 - Siempre se practica prueba testifical y pericial antes de la resolución.
31. ¿Cómo se acreditará la solvencia técnica en un contrato de suministro a través de una relación de los principales suministros realizados? Indique la respuesta correcta:
- Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.
 - Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los cinco últimos años, en la que se indique el importe, fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.
 - Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los siete últimos años, en la que se indique el importe, fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.
32. En el ámbito de los contratos del sector público, ¿qué efecto produce la resolución por incumplimiento culpable del contratista?
- Al contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.
 - Los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas, sin que más allá de tal estipulación exista obligación alguna para el contratista.
 - Al contratista le será incautada la garantía. Ello excluye su responsabilidad, sin que exista obligación de abonar los daños y perjuicios ocasionados que excedan del importe de la garantía incautada.
33. El Ayuntamiento de Pozuelo de Alcorcón adjudicó a la mercantil FCA, S.A. el contrato público de recogida de basuras. Han transcurrido siete meses sin que el Ayuntamiento le haya pagado el precio pactado en el plazo fijado en el pliego, ¿puede FCA, S.A. solicitar la resolución anticipada del contrato de concesión de servicios?
- No, porque las únicas causas de resolución anticipada en este caso son el rescate por la Ayuntamiento y la supresión del servicio.
 - No, únicamente podría reclamar al Ayuntamiento el importe adeudado en vía administrativa.
 - Sí, porque la demora superior a seis meses por parte del Ayuntamiento en la entrega al concesionario de la contraprestación pactada es causa de resolución anticipada del contrato.

34. En el ámbito de la expropiación forzosa, ¿qué efecto produce el hecho de que la Administración acepte la valoración de los propietarios efectuada en la hoja de aprecio en relación con el bien que se expropia?
- a. La Administración extenderá hoja de aprecio fundada del valor del objeto de la expropiación, que se notificará al propietario, para que la acepte o rechace.
 - b. Se pasará el expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación.
 - c. Se entenderá determinado definitivamente el justo precio.
35. ¿Cuál de las normas que se indican a continuación es de aplicación, en los términos previstos en la propia norma, a los municipios de la Comunidad de Madrid?
- a. Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.
 - b. Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid.
 - c. Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación de Pública de la Comunidad de Madrid.
36. Las mercantiles JOFAMETAL, S.A. y MOTAJO, S.A. son dos empresas españolas que se presentan en Unión Temporal de Empresas (UTE) a la licitación para las obras de construcción de un nuevo Centro Cultural, cuyo valor estimado asciende a 800.000 €. JOFAMETAL, S.A. tiene clasificación como contratista de obras y MOTAJO, S.A. tiene clasificación como contratista de servicios. ¿Es posible adjudicar el contrato a dicha UTE?
- a. No, porque es obligatorio que todos los miembros de la UTE tengan clasificación como contratistas de obra.
 - b. Sí, porque la clasificación del contratista ya no es un requisito obligatorio.
 - c. Sí, porque a los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los empresarios que concurran agrupados se atenderá, en la forma que reglamentariamente se determine, a las características acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones.
37. Se ha tramitado un contrato de servicios y durante su vigencia se detecta la necesidad de su modificación por una causa imprevista en el pliego que deriva de circunstancias sobrevenidas y que eran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación por una administración diligente. Esta modificación, que supone una ampliación del 30% del precio inicial del contrato (IVA excluido), no supone la alteración de la naturaleza global del contrato y es la primera modificación acordada de este tipo. Señale la respuesta correcta:
- a. No es posible en ningún caso la modificación superior al 20% del precio inicial del contrato.
 - b. La modificación es siempre obligatoria para el adjudicatario.
 - c. Es necesaria la conformidad previa del adjudicatario.

38. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones, se considerará gasto realizado el que:
- a. Haya sido efectivamente realizado dentro del plazo de ejecución.
 - b. Haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de ejecución.
 - c. Haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
39. En materia de subvenciones, la rendición de la cuenta justificativa es una obligación:
- a. Del beneficiario o de la entidad colaboradora.
 - b. Exclusiva del beneficiario.
 - c. Exclusiva de la entidad colaboradora.
40. De conformidad con el artículo 18.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuál de estas afirmaciones NO es cierta respecto de los derechos y deberes de los vecinos?
- a. Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral.
 - b. Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley.
 - c. Ejercer la iniciativa legislativa popular en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril.
41. ¿Quién puede proceder a la disolución de los órganos de las corporaciones locales?
- a. El Senado.
 - b. El Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad autónoma, previo acuerdo favorable del Senado.
 - c. El Consejo de Ministros.
42. En relación con el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuál de las siguientes atribuciones podrá delegar el Alcalde únicamente en la Junta de Gobierno Local?
- a. Ordenar la publicación, ejecución y cumplimientos de los acuerdos de los órganos ejecutivos del Ayuntamiento.
 - b. Establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal y asegurar su continuidad.
 - c. Ejercer la superior dirección del personal al servicio de la Administración municipal.

43. Irene presentó en el Ayuntamiento de X la preceptiva declaración responsable para instalar en su local comercial una librería, adjuntando plano del local y el proyecto de adecuación del mismo. En su escrito manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la legislación para ejercer dicha actividad en el citado local, que dispone de documentación acreditativa y que se compromete a cumplir con los requisitos mientras el local permanezca abierto. Transcurrido un tiempo, los técnicos municipales constatan que tanto los planos como el proyecto técnico presentado contienen datos inexactos y falsos de carácter esencial. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento de X?
- El Ayuntamiento podrá ordenar la paralización del ejercicio de la actividad.
 - Incoar un procedimiento sancionador en todo caso.
 - Nada, puesto que el ordenamiento jurídico establece una presunción *iuris et de iure* de veracidad de la documentación presentada por el interesado.
44. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la adjudicación directa de bienes patrimoniales se podrá acordar:
- Cuando la subasta o concurso sea declarada desierta y no haya transcurrido más de 3 meses desde su celebración.
 - Cuando la subasta o concurso sea declarada desierta y no haya transcurrido más de 6 meses desde su celebración.
 - Cuando la subasta o concurso sea declarada desierta y no haya transcurrido más de 1 año desde su celebración.
45. ¿Cuál de las siguientes modalidades de gestión indirecta de los servicios públicos locales exige necesariamente la existencia de un contrato administrativo sometido a la legislación de contratos del sector público?
- La entidad pública empresarial local.
 - La sociedad mercantil de capital íntegramente público.
 - La gestión interesada.
46. El derecho de acceso a la información pública según el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio. Señale cuál NO está contemplado en dicha Ley:
- Los intereses económicos y comerciales.
 - La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
 - Las funciones administrativas.
47. Según la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, en adelante LSCM, forma parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, con independencia de la clase de éste:
- Instar a la aprobación del pertinente planeamiento de desarrollo a fin de establecer la ordenación pormenorizada precisa para legitimar la actividad de ejecución del planeamiento.
 - Edificar en el solar en las condiciones y, en su caso, plazos establecidos por el planeamiento.
 - Permitir la realización por la Administración pública competente de los trabajos de restauración o mejora ambiental que sean necesarios.

48. Conforme a la LSCM, tendrá la condición de suelo urbano los terrenos que, formando parte de una trama urbana, cumplan alguna de las siguientes condiciones:
- a. Que sean solares no aptos para la edificación o construcción y estar completamente urbanizados.
 - b. Que estén urbanizados en ejecución del planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones.
 - c. Que el planeamiento regional territorial y el planeamiento urbanístico consideren necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, por sus valores agrícolas, forestales, ganaderos o por sus riquezas naturales.
49. Según lo establecido en la LSCM, el incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución de obras de conservación y rehabilitación, habilitará a la Administración actuante para adoptar la siguiente medida:
- a. Expropiación forzosa.
 - b. Ejecución subsidiaria a costa de la Administración.
 - c. Ejecución subsidiaria a costa de la Administración y hasta el límite del deber normal de conservación.
50. Según la LSCM, los actos amparados por órdenes de ejecución municipales:
- a. No requerirán título habilitante urbanístico.
 - b. Requerirán la obtención de licencia urbanística.
 - c. Requerirán la obtención de licencia urbanística o presentación de declaración responsable.
51. La LSCM dispone que se entenderá por revisión de un plan general:
- a. La adopción de nuevos criterios que afecten a la totalidad del suelo del término municipal.
 - b. La adopción de nuevos criterios que afecten al porcentaje del suelo del término municipal que disponga el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
 - c. La adopción de nuevos criterios que afecten al porcentaje del suelo del término municipal que acuerde el Pleno.
52. La LSCM establece respecto de los Planes de Ordenación Urbanística:
- a. El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor el mismo día de su publicación.
 - b. El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el Boletín Oficial del Estado y tendrá vigencia indefinida.
 - c. El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y tendrá vigencia indefinida.
53. De conformidad con la LSCM, comprenden los suelos acotados en el interior de los ámbitos de actuación o sectores que se delimitan para llevar a cabo la actividad de ejecución del planeamiento bajo la modalidad de actuación integrada:
- a. Las áreas de reparto.
 - b. Las unidades de ejecución.
 - c. Las unidades de equidistribución.

54. La LSCM dispone que la ejecución privada del planeamiento en actuaciones integradas se llevará a cabo por el sistema de:
- Cooperación.
 - Compensación.
 - Ejecución forzosa.
55. De conformidad con la LSCM la sustitución del sistema de compensación:
- Podrá tener lugar por desistimiento de la iniciativa beneficiaria de la ejecución.
 - Podrá tener lugar únicamente por comisión de una infracción urbanística muy grave.
 - No podrá tener lugar.
56. De conformidad con la LSCM el sistema en el que los propietarios aportan la totalidad de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita, y la Administración ejecuta las obras de urbanización por cuenta y cargo a los mismos es:
- El sistema de compensación.
 - El sistema de cooperación.
 - No es un sistema recogido en la Ley del Suelo.
57. Respecto de las licencias urbanísticas, la LSCM establece que:
- Se otorgarán conforme a reglas establecidas en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
 - El procedimiento de otorgamiento se regulará en las ordenanzas municipales.
 - Ambas son correctas.
58. En los supuestos de sujeción a licencia urbanística regulados en la LSCM, transcurrido el plazo de resolución sin haberse notificado esta:
- Se entenderá estimada por silencio administrativo.
 - Se entenderá estimada por silencio administrativo, salvo si afectan al dominio público.
 - Se entenderá desestimada por silencio administrativo.
59. La LSCM dispone que las actuaciones sujetas a declaración responsable urbanística que se realicen sin su presentación:
- Se entienden amparadas en título habilitante siempre que no sean contrarias o disconformes con la legalidad urbanística aplicable.
 - Se considerarán como actuaciones sin título habilitante a todos los efectos, aplicándoseles el régimen de protección de la legalidad y sancionador previsto en la Ley 9/2001.
 - Se considerarán como actuaciones sin título habilitante a todos los efectos, sin que sea posible aplicar el régimen de protección de la legalidad y sancionador previsto en la Ley 9/2001.
60. Según la LSCM, el establecimiento o la delimitación de reservas de terrenos de posible adquisición para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos del suelo mediante los instrumentos de ordenación del territorio y los Planes Generales y Sectoriales, comporta:
- La declaración de la utilidad pública y la necesidad de la ocupación a efectos de expropiación forzosa por un tiempo máximo de dos años, prorrogable una sola vez por otros dos años mediante declaración expresa fundada en causa justificada.
 - La declaración de la utilidad pública y la necesidad de la ocupación a efectos de expropiación forzosa por un tiempo máximo de cuatro años, prorrogable una sola vez por otros dos años mediante declaración expresa fundada en causa justificada.
 - La declaración de la utilidad pública y la necesidad de la ocupación a efectos de expropiación forzosa por un tiempo máximo de cuatro años, sin posibilidad de prórroga.

61. Según la LSCM, están sometidas al régimen de caducidad:
- Las licencias, pero no las declaraciones responsables urbanísticas.
 - Las declaraciones responsables, pero no las licencias urbanísticas.
 - Las licencias y las declaraciones responsables urbanísticas.
62. La LSCM dispone que la Administración pública que haya adquirido como consecuencia del ejercicio del derecho de tanteo o el de retracto:
- Estará obligada a incorporar el bien al correspondiente patrimonio público del suelo o, en todo caso, dar al mismo un destino conforme a la causa que motivó la sujeción a dichos derechos.
 - Estará obligada a incorporar el bien al correspondiente patrimonio público del suelo si así lo dispone el reglamento orgánico, o, en todo caso, dar al mismo un destino conforme a la causa que motivó la sujeción a dichos derechos.
 - Estará obligada a incorporar el bien al correspondiente patrimonio público del suelo si así lo disponen las ordenanzas, o, en todo caso, dar al mismo un destino conforme a la causa que motivó la sujeción a dichos derechos.
63. Según la LSCM concedida licencia urbanística, las obras que se realicen a su amparo o iniciadas éstas:
- La inspección urbanística llevará a cabo todas aquellas visitas que fueran precisas para velar e informar sobre la correcta aplicación de las normas y el planeamiento urbanístico.
 - Deberán ser visitadas a efectos de su inspección al menos dos veces: una con motivo del inicio o acta de replanteo de las obras y otra con ocasión de la terminación de éstas.
 - Las dos respuestas son correctas.
64. De conformidad con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación del desempeño en:
- El régimen disciplinario.
 - En la percepción de las retribuciones complementarias.
 - Solo en la formación continua obligatoria.
65. La Relación de Puestos de Trabajo en entidades locales se configura como instrumento obligatorio que comprenderá, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias, ¿quién establece las normas para su confección?
- La propia entidad local.
 - El Estado.
 - La Comunidad Autónoma.
66. ¿Cuál no es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera en el EBEP?
- La pena accesoria firme de inhabilitación absoluta.
 - Pase a excedencia voluntaria por interés particular.
 - Sanción disciplinaria firme de separación del servicio.

67. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el modelo español de función pública respecto a la posición del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?
- a. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público es supletorio para el personal funcionario de las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.
 - b. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece las bases del régimen estatutario del personal funcionario de las Administraciones de las entidades locales.
 - c. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público es de aplicación exclusiva a la Administración General del Estado y a los organismos estatales.
68. El tiempo de permanencia en la situación de excedencia de un funcionario para el cuidado de un familiar a su cargo será computable a efectos de:
- a. Trienios y derechos en el régimen de la Seguridad Social.
 - b. Trienios, reserva al puesto de trabajo al menos durante un año y derechos en el régimen de la Seguridad Social.
 - c. Trienios, carrera y derechos en el régimen de la Seguridad Social.
69. La provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad con:
- a. El sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.
 - b. Lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación y, en su defecto por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.
 - c. El sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera y, en su defecto, por lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación.
70. El personal funcionario de carrera que, en virtud de procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración Pública distinta, será declarado en la situación de:
- a. Excedencia voluntaria.
 - b. Excedencia por prestación de servicios en el sector público.
 - c. Servicio en otras Administraciones.
71. El Comité de Seguridad y Salud:
- a. Estará formado por los Delegados Sindicales, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados Sindicales, de la otra.
 - b. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.
 - c. En sus reuniones participarán, con voz, pero sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa incluidos en su composición.

72. En un Ayuntamiento, se concede a un funcionario interino un permiso no retribuido por interés particular durante un plazo de seis meses. Antes de finalizar dicho plazo el funcionario solicita la reincorporación al puesto que venía ocupando. Teniendo en cuenta que el mismo actualmente sigue vacante, ¿cómo resolvería su solicitud?
- Desestimándola, debe agotar el plazo de concesión del permiso.
 - Estimándola parcialmente, se admite la reincorporación antes de finalizar el plazo, pero en el puesto que disponga la administración.
 - Estimándola, se admite la reincorporación en el mismo puesto que venía ocupando.
73. Una funcionaria A1 del Ayuntamiento colabora impartiendo seminarios en un colegio profesional, esta actividad, de conformidad con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas,
- Es incompatible, según establece el artículo 12.
 - Requiere previo reconocimiento.
 - Está exceptuada del régimen de incompatibilidad.
74. Entre los derechos de carácter individual que tienen los empleados públicos, establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se encuentra:
- Derecho a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación de prevención de riesgos laborales.
 - Derecho a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
 - Derecho a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
75. Según lo dispuesto en el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad:
- No suspenderá su tramitación y se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.
 - Se suspenderá su tramitación y se pondrá en conocimiento del Juzgado correspondiente.
 - Se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal.
76. En relación con el hecho imponible de un impuesto, marque la respuesta correcta:
- Son supuestos de no sujeción, aquellos en los que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal.
 - El hecho imponible, como presupuesto cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal, debe ser fijado por la ley.
 - El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible, y siempre es en ese momento cuando se produce la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar.

77. El recurso de reposición contra los actos dictados en materia tributaria:

- a. Será de interposición obligatoria y previa, a la reclamación económico-administrativa, en el caso de actos susceptibles de esta última.
- b. Tratándose de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el plazo para la interposición se computará a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario de pago.
- c. Si se interpone dentro del plazo establecido para recurrir y dentro de dicho plazo se interpone también reclamación económico-administrativa, se resolverá, en todo caso, inadmisión el recurso de reposición.

78. En cuanto a los procedimientos especiales de revisión de los actos dictados en materia tributaria:

- a. Se enumeran en el artículo 216 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y todos ellos pueden iniciarse de oficio o a instancia del interesado.
- b. El procedimiento para declarar la nulidad de pleno derecho se iniciará siempre por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico.
- c. El procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio.

79. Los ingresos de Derecho privado de las entidades locales:

- a. Están sujetos a las normas y procedimientos del derecho privado, y, por tanto, no está limitado su destino por la normativa reguladora de las haciendas locales.
- b. Tiene la consideración de ingresos de derecho privado el importe obtenido en la enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las entidades locales, aunque sea de dominio público.
- c. Para hacer efectivos los ingresos de Derecho privado, la entidad local no podrá desarrollar el procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.

80. En relación con las tasas y los precios públicos:

- a. El devengo de las tasas y la obligación de pago de los precios públicos se puede producir cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad.
- b. En el caso de las tasas, una vez efectuado el pago de la cuota tributaria correspondiente, ya no procederá la devolución del importe ingresado.
- c. En el caso de los precios públicos, una vez cumplida la obligación de pago, no procederá a la devolución del importe ingresado.

81. En el supuesto de que sobre un bien inmueble patrimonial de titularidad de la entidad local, esté constituido un derecho real de superficie:

- a. No se deberá girar el recibo correspondiente al Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, por identidad de sujeto pasivo y sujeto activo.
- b. El obligado al pago será el sujeto titular del derecho real de superficie.
- c. De acuerdo con el artículo 61.5 de la Ley reguladora de Haciendas Locales, los bienes patrimoniales no están sujetos al Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, sin excepción alguna.

82. Las bonificaciones previstas en el artículo 103 de la Ley reguladora de las Haciendas locales, sobre la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras:
- Tienen carácter potestativo y la concesión de una de las bonificaciones previstas excluye que se puedan aplicar las demás.
 - Tienen carácter potestativo y, tal y como establece el artículo citado, se aplicarán todas las bonificaciones que regule la ordenanza fiscal de forma simultánea.
 - Tienen carácter potestativo y, tal y como establece el artículo citado, es posible la aplicación simultánea de todas ellas.
83. El Presupuesto de la entidad local, además de los estados de gastos e ingresos:
- Debe ir acompañado, como documento anexo, de los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los municipios.
 - Solo necesita ir acompañado, con carácter obligatorio, de la Memoria explicativa de su contenido y del preceptivo Informe de la Intervención General.
 - De acuerdo con el artículo 168 de la ley reguladora de las Haciendas locales, la documentación que hay que unir al presupuesto de la Entidad local es: Memoria explicativa de su contenido, Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, Anexo de Personal, Anexo de Inversiones, y, potestativamente, Anexo con información relativa a convenios suscritos con las Comunidades autónomas en materia de gasto social.
84. En cuanto a la estabilidad presupuestaria y la estabilidad financiera:
- El principio de estabilidad presupuestaria hace referencia a la capacidad de una Administración pública para financiar compromisos de gasto presentes y futuros, dentro de los límites establecidos por la normativa aplicable.
 - Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.
 - Los supuestos que determinan que una Administración deba formular un plan económico-financiero son, de acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria o del objetivo de deuda pública.
85. El principio de especialidad temporal de los créditos presupuestarios:
- Determina el ámbito temporal en el que debe ejecutarse el gasto público, de acuerdo con la especialidad cualitativa y cuantitativa que el crédito presupuestario tiene autorizado en el presupuesto, sin excepciones.
 - La incorporación de remanentes de crédito es una excepción al principio de especialidad temporal de los créditos y de la anualidad presupuestaria.
 - En ningún caso se pueden contraer obligaciones derivadas de gastos que se realicen fuera del año natural del propio ejercicio presupuestario.

86. Señale la respuesta más correcta:

- a. La transferencia de crédito no puede afectar a créditos extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
- b. La competencia para aprobar una transferencia de crédito vendrá determinada en todo caso por las bases de ejecución del presupuesto.
- c. La transferencia de crédito no puede afectar a créditos de personal.

87. Señale la respuesta correcta:

- a. En el caso de mayores ingresos tributarios en relación con los previstos, se puede acordar una generación de créditos financiada con esos mayores ingresos.
- b. En el caso de ingresos derivados de enajenación de bienes de la entidad local, se puede acordar una generación de créditos, a financiar por dichos ingresos.
- c. En el caso de que, a mitad de un ejercicio presupuestario, se acuerde la imposición de un nuevo tributo, se puede acordar una generación de crédito a financiar con los ingresos que procedan del nuevo tributo.

88. La autorización del gasto:

- a. Es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta, pero no implica relaciones con terceros externos a la entidad local.
- b. Es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto aproximado, y ya implica relaciones con terceros externos a la entidad local.
- c. La competencia para la autorización del gasto es susceptible de delegación.

89. El control interno de la actividad económico financiera de la entidad local:

- a. Se ejerce por el órgano interventor a través del ejercicio de la función interventora, en caso de fiscalización plena de los gastos y de los ingresos.
- b. Se ejerce por el órgano interventor mediante el ejercicio de la función interventora y del control financiero, este último, en caso de que se haya optado por una fiscalización previa limitada de la ejecución del gasto.
- c. Se ejerce por el órgano interventor mediante el ejercicio de la función interventora y del control financiero, con independencia del tipo de fiscalización que se haya establecido.

90. En cuanto al control externo de la gestión económica financiera realizado por el Tribunal de Cuentas, señale la respuesta correcta:

- a. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados.
- b. Se realiza aleatoriamente, a través de inspecciones anuales acordadas de oficio por el propio Tribunal, sin que proceda remitirle ninguna información por los órganos de la entidad local.
- c. Una vez fiscalizadas las cuentas de la entidad local por el Tribunal de Cuentas, no habrá posibilidad de corrección de las mismas, simplemente el Tribunal exigirá la responsabilidad contable que proceda.

PREGUNTAS DE RESERVA

91. El coeficiente de ponderación sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales fijadas en las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas:
- a. Es de aplicación potestativa.
 - b. Si la cifra de negocios es de 20.000.000 euros, el coeficiente será de 1,32.
 - c. Se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Importe neto de la cifra de negocios (euros)	Coeficiente
Desde 100.000,00 hasta 500.000,00	1,29
Desde 500.000,01 hasta 10.000.000,00	1,30
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00	1,31
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00	1,33
Más de 100.000.000,00	1,35
Sin cifra neta de negocio	1,31

92. Según el Art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál es requisito esencial para la responsabilidad patrimonial?
- a. Existencia de culpa de la Administración o de su personal y autoridades.
 - b. Daño efectivo, evaluable económicamente, individualizado y antijurídico.
 - c. Daño causado solo por el funcionamiento anormal de los servicios públicos.
93. ¿Es posible declarar urgente la ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de una obra o finalidad determinada?
- a. Sí, mediante la simple declaración del órgano expropiante.
 - b. Sí, excepcionalmente, mediante acuerdo del Consejo de Ministros.
 - c. No, pero sí podrá declararse la tramitación de emergencia.
94. En el caso de que se tramite un procedimiento abierto y una de las ofertas presentadas a la licitación se considere anormalmente desproporcionada según los criterios determinados en los pliegos, señale la respuesta correcta:
- a. Si es la única oferta válida presentada en la licitación, la mesa puede proponer directamente su adjudicación al órgano de contratación, si se prestan garantías suficientes.
 - b. En cualquier caso, se debe requerir al licitador que haya presentado la oferta y darle un plazo suficiente para que justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o de cualquier otro parámetro sobre la base del cual se haya definido la anormalidad de la oferta.
 - c. Se debe requerir al licitador que la haya presentado siempre y cuando la diferencia con la siguiente oferta, no considerada anormalmente baja, sea superior al 5% de la media de las ofertas.

95. De conformidad con la LSCM, ¿en qué plazo deberá resolverse la aprobación definitiva de un plan general desde que el Municipio interesado presenta el expediente en el registro de la Consejería competente?
- a. Un año.
 - b. Seis meses.
 - c. Cuatro meses.
96. Según la LSCM, el plazo del derecho de superficie concedido por las Administraciones Públicas:
- a. No podrá exceder de setenta años.
 - b. No podrá exceder de setenta y cinco años.
 - c. Se realizará por un mínimo de setenta años.
97. La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro constituye:
- a. Falta disciplinaria muy grave de conformidad con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
 - b. Falta disciplinaria grave de conformidad con el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.
 - c. Falta disciplinaria grave de conformidad con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
98. La concertación de una operación de crédito local, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley reguladora de las Haciendas locales:
- a. En el caso de que se trate de una operación de crédito a largo plazo, puede ser competencia del Pleno o del presidente de la corporación local.
 - b. En el caso de que se trate de operaciones de crédito a corto plazo, la competencia será del presidente de la corporación local, salvo que el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación, supere el 10 por ciento de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
 - c. En el caso de que se trate de operaciones de crédito a largo plazo, la competencia será del presidente de la corporación local, salvo que el importe acumulado dentro de cada ejercicio económico supere el 15 por ciento de los recursos de carácter ordinario previstos en el presupuesto.

99. La gestión tributaria en los municipios de gran población:

- a. En todo caso, se ejerce por un órgano de gestión tributaria, responsable de ejercer como propias las competencias que a la Administración Tributaria local le atribuye la legislación tributaria.
- b. Al órgano de gestión tributaria le corresponderán las funciones de a gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos tributarios municipales, excepto la recaudación en período ejecutivo de los ingresos no tributarios.
- c. La función de recaudación y su titular estarán adscritos al órgano de gestión tributaria, en caso de que el Pleno haya hecho uso de la habilitación prevista en el artículo 135.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

100. La cuota tributaria de la tasa:

- a. Se establecerá siempre teniendo en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerla.
- b. Puede consistir, si así lo dispone la correspondiente ordenanza fiscal, en la cantidad resultante de aplicar una tarifa.
- c. Se determinará por la ordenanza fiscal y deberá ser siempre una cantidad fija señalada al efecto.